



AMPARO EN REVISION 442/97.

QUEJOSO: [REDACTED]

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA
SECRETARIO: RAFAEL COELLO CETINA



CORTE DE
LA NACION.
SALA DE ACUERDOS

México, Distrito Federal.- Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día
veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS para resolver los autos del recurso de revisión
número 442/97, relativo al juicio de amparo indirecto 1402/96; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado el tres de diciembre de
mil novecientos noventa y seis, en la Oficialía de Partes Común a
los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla turnado el mismo
día al Juez Primero de Distrito, [REDACTED]

[REDACTED] por su propio derecho, solicitó el amparo y
protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y
por los actos que a continuación se precisan:-

"AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como
autoridades ordenadoras señalo: - - - 1.- Al
honorable Congreso local del Estado de Puebla. - -
- 2.- Al ciudadano Gobernador Constitucional del

**Estado. - - - 3.- Al ciudadano Secretario de
Gobernación del Estado de Puebla. - - - 4.- Al
ciudadano Director del Periódico Oficial del Estado.
Todas estas autoridades con domicilio oficial bien
conocido. - - - Como autoridades ejecutoras señalo:
- - - 1.- Al ciudadano Juez Cuarto de Defensa Social
en el Estado, todas con domicilio oficial bien
conocido. - - - 2.- Al ciudadano Diligenciario de los
expedientes impares adscrito al Juzgado Cuarto de
Defensa Social".**

**"ACTOS RECLAMADOS: - - - 1.- Del H. Congreso
del Estado se reclama la inconstitucionalidad de
los artículos 50 bis y del 103 ambos del Código de
Defensa Social vigente en el Estado, en cuanto
hace a la discusión, aprobación y expedición de
esos preceptos. - - - 2.- Del Gobernador
Constitucional del Estado de Puebla reclamo la
inconstitucionalidad de los preceptos antes
enunciados en lo que hace a la aprobación,
promulgación y publicación de los mismos por
dicha autoridad. - - - 3.- Del Secretario de
Gobernación en el Estado reclamo la firma y el
refrendo de esas dos disposiciones que considero
anticonstitucionales. - - - 4.- Del Director del
Periódico Oficial del Estado reclamo la
inconstitucionalidad de dichos preceptos en lo que
respecta a su publicación en dicho Periódico**



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL



Oficial del Estado. Ambas disposiciones fueron publicadas en dicho Periódico Oficial local por decreto de 23-VI-1994 en el número 1 sección segunda de 1º-VII-1994. - - - 5.- Del Juez Cuarto de

Defensa Social de esta ciudad capital como autoridad ejecutora reclamo la aplicación y ejecución de los artículos 50 bis y 103 del Código de Defensa Social vigente en el Estado, mediante el Auto dictado con fecha veintinueve de octubre del año en curso, mismo que fue notificado con fecha catorce de noviembre del mismo año. El cual acompaño la cédula con que se me notificó a la presente demanda de garantías. En dicho acuerdo se me requiere para gozar del beneficio de la conmutación de la pena del pago de la reparación del daño, no obstante que en acuerdo anterior ya se me había concedido dicho beneficio de la conmutación de la pena sin condicionamiento alguno. La autoridad judicial responsable pretende apoyar ese nuevo auto en base al artículo 103 ahora combatido. - - - 6.- En cuanto a la última autoridad señalada como ejecutora reclamo la notificación del referido acuerdo y asimismo su ejecución material".

SEGUNDO.- El promovente del juicio de amparo narró los antecedentes del caso, señaló como garantías violadas las

consagradas en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal y expresó como conceptos de violación los siguientes:

"PRIMERO.- Los actos reclamados a todas las autoridades como responsables son directamente violatorias del artículo 1o. constitucional, dicho artículo establece: "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece". De donde se desprende que mientras no se decrete alguna medida a que se refiere el artículo 29 constitucional, como en el caso no se ha dado ningún acto de autoridad, ni aún la misma ley secundaria u ordinaria como lo son los preceptos legales reclamados no pueden suspender ni restringir las garantías individuales de los gobernados. - - - No obstante la clara limitación constitucional mencionada las autoridades responsables mediante ley y actos materiales de aplicación y ejecución de los artículos que se les reclama pretenden violar mis garantías individuales de libertad, fundamentación y motivación y seguridad jurídica así como la de previa audiencia, toda vez que como lo he dicho el suscrito sólo era chofer asalariado el día del accidente, esto es, responsable penal pero no civil, coartándome



SUPREMA
JUSTICIA D.
SECRETARIA GEN



CORTE DE
LA NACION
AL DE ACUERDOS

mediante esos dos artículos a defenderme en el juicio civil correspondiente, o sea en el incidente de responsabilidad civil proveniente del delito ni tampoco se lo están dando al dueño del vehículo que iba conduciendo el de la voz y ahí oponer las defensas y excepciones correspondientes, y así de ser procedente ser vencido en juicio, y todo esto tiene su causa en la discusión, aprobación, autorización, promulgación, refrendo, publicación de los artículos 50. bis y el 103 de el ya cuerpo legal mencionado que hacen las autoridades ordenadoras y desde luego también tiene su origen en la aplicación y ejecución que de estas disposiciones hacen las autoridades señaladas como ejecutoras además como he dicho el Juez del conocimiento cambia sin mediar recurso alguno el contenido del acuerdo inmediato anterior. - - -

SEGUNDO.- El artículo 14 constitucional establece "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al caso. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al

delito de que se trata." - - - En el presente caso sin habérseme condenado en la sentencia definitiva ni en la de la Sala a pagar la reparación del daño para gozar el beneficio de la conmutación de la pena, toda vez que se me otorga simple y llanamente en dicha sentencia en su resolutivo tercero, el juez natural también me la concede pero después arbitrariamente dicta otro acuerdo en que me condiciona el beneficio de la conmutación de la pena y aplica el artículo 103, el cual obviamente me obliga a responder tanto de la responsabilidad penal como la civil, sin previo juicio en tribunales previamente establecidos para tal efecto, negándome dicho numeral a derechos mínimos como son contestar demanda, ofrecer pruebas, etc., y en cambio me perjudica con gravamen irreparable aplicándome otra pena por simple analogía, todo eso prohibido tajantemente por el artículo transcrito. - - - El artículo 17 constitucional in fine establece: "nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil", y no obstante esto, el artículo 50 bis establece "La reparación del daño por el delincuente, tiene el carácter de pena pública, independientemente de la acción civil, y se exigirá de oficio por el Ministerio Público determinando su cuantía con base en las pruebas obtenidas en el proceso", y el artículo 103 "Una vez pagada la multa que substituya la prisión así como



SUPREMA C
JUSTICIA DE L.
SECRETARÍA GENERAL



CORTE DE
NACION.
DE ACUERDOS.

la sanción pecuniaria incluida la reparación del daño que se hubiere impuesto, la autoridad que conmutó la sanción ordenará la libertad del sentenciado". Evidentemente las autoridades ordenadoras se olvidaron regular con toda claridad cómo quedarían los que en ejercicio de nuestro trabajo tuviéramos la mala fortuna de tener un accidente de tránsito, es decir, estando sujetos a un patrón, y en consecuencia que cómo quedaría la responsabilidad penal deslindada de la civil, puesto que de una lectura al 50 bis, en cuestión deduzco que los legisladores quisieron que "la reparación del daño por el delincuente, tiene el carácter de pena pública independientemente de la acción civil". O sea primeramente para disfrutar de mi libertad tengo que pagar la reparación del daño, y de todos modos como ambas cosas son independientes posteriormente si la agraviada me quiere demandar por la vía civil, lo puede hacer con lo que se me causaría un doble perjuicio, es decir tendría que efectuar doble pago. Las autoridades responsables asimismo se olvidaron que el artículo 51 bis del mismo Código de Defensa Social del Estado, establece "Están obligados a reparar los daños en los términos del artículo anterior: fracción IV.- Los dueños, empresarios o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos

que cometan sus obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, con motivo y en el desempeño de su servicio". - - - Está plenamente probado en la causa número 133/995 que el día de los hechos era un simple operario asalariado, de manera que estoy dentro de la hipótesis de la fracción cuarta del numeral que he transcrito. De donde resulta una clara contradicción entre el artículo combatido con otros del mismo ordenamiento incurriendo las responsables en violación al principio constitucional de unidad y congruencia en el orden jurídico situación que no es nada justa para el de la voz por la incertidumbre que se crea con tantas disposiciones contradictorias en un sólo cuerpo legal. Por otro lado el artículo 83 del Código de Defensa Social del Estado establece: "Los delitos culposos se sancionarán con prisión de tres días a cinco años y suspensión hasta de dos años del derecho de ejercer la profesión o el oficio, en cuyo ejercicio se hubiera cometido el delito". Este dispositivo es claro y en ninguna parte del mismo se desprende que aparte de las sanciones que contempla esté incluido el pago de la reparación del daño, lo que fortalece mi convicción de que los artículos que impugno mediante este juicio constitucional son atentatorios no sólo de los principios y reglas del orden ordinario legal sino principalmente de los



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL



CORTE DE
LA NACION.
L. DE ACUERDOS.

principios y reglas de orden constitucional, otorgando las responsables ordenadoras a las ejecutoras la facultad de coartar el derecho básico de la libertad (en este caso condicionando el beneficio de la conmutación de la pena), sin antes otorgar al procesado y al responsable del pago de la reparación del daño (en base al artículo 51-bis le corresponde al propietario de la combi colectiva), la oportunidad de defenderse lo cual evidentemente choca con el espíritu del legislador constitucional. Los actos legislativos aun cuando provengan de un Congreso Local deben constreñirse a las exigencias de la Constitución según jurisprudencia que más adelante señalaré pues de lo contrario procedería el amparo y la protección de la Justicia Federal, pues todas las autoridades incluidas las legislativas están obligadas a respetar las garantías constitucionales.

- - - TERCERO.- Por medio de las disposiciones ahora impugnadas se hace nugatorio mi beneficio de la conmutación de la pena por multa, asimismo se hace nugatoria la función del fondo para la reparación del daño a las víctimas de los delitos, puesto que primero se me prohíbe seguir ejerciendo el oficio de chofer según la sentencia dictada en la causa número 133/995, en segundo lugar como no he encontrado trabajo por esa razón solicité el pago de la multa por medio del fondo a

que he hecho alusión, y por si fuera poco mediante esa disposición (del acuerdo de fecha veintinueve de octubre del año en curso si (sic) siquiera se ordena darme vista ni término para manifestar lo que a mis derechos conviniera) tengo que pagar una suma que no me corresponde según el artículo 51 bis del Código sustantivo penal, y como no tengo ese dinero seguramente tendré que permanecer en la cárcel, y no obstante ello la agraviada en la vía civil me va a demandar de nuevo en la vía civil o al dueño de la combi colectiva. - - - CUARTO.- Todas las autoridades



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL

responsables violan en mi particular perjuicio el principio de supremacía de la Constitución Federal en su artículo 133 el cual estatuye "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados". Este artículo ordena a todas las autoridades que de ninguna manera hagan y ejecuten leyes que estén en contraposición a la misma, y aun cuando existan leyes que deban



CORTE
LA NACION
DE ACUERDO

aplicar y ejecutar pero resultando esta contrarias a las disposiciones constitucionales deberán en todo caso apegarse a los lineamientos de la Carta Magna y no a las leyes contrarias a ellas. - - - Las autoridades ejecutoras a sabiendas de que los preceptos seudolegales ahora combatidos están en contraposición abierta a los artículos 1o., 14, 16, 133 y en contra de los artículos del mismo Código Punitivo (48, 72, 51 bis, 83 y 100, este último tampoco contempla que el sentenciado tenga que pagar la reparación del daño), las aplican y ejecutan en vez de abstenerse y en su lugar aplican lo dispuesto en los artículos mismos a los cuales contradice, máxime que nos encontramos en un procedimiento penal en donde operan muchos principios a favor del suscrito. - - - QUINTO.- La presente demanda de garantías se interpone dentro del término de quince días a partir del primer acto de aplicación considerando encontrarme ante una ley de carácter heteroaplicativa, no habiendo interpuesto recurso ordinario en contra del acuerdo en que se aplican los artículos reclamados y su forma de aplicarlos por el Juez del conocimiento, toda vez que no existe ninguno reglamentado al respecto."

TERCERO.- El Secretario encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito mediante acuerdo de tres de

diciembre de mil novecientos noventa y seis, admitió la demanda, que fue registrada con el número 1402/96. Seguido el juicio, el titular de dicho juzgado pronunció sentencia el treinta y uno de diciembre siguiente, cuyo punto resolutivo dice:

"UNICO.- La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a

[REDACTED] contra los actos que impugna del Congreso del Estado, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobernación del Estado, Juez Cuarto de Defensa Social de esta ciudad, y Diligenciarío impar adscrito al anterior; actos que se precisaron en resultando primero de este fallo."

Las consideraciones del juzgador para fallar en el sentido en que lo hizo son:



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENE

"PRIMERO.- Este tribunal es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y la fracción VII de la Constitución Federal; 36 y 114 de la Ley de Amparo; 48, 51, fracción I y 52, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. - - - SEGUNDO.- Son ciertos los actos que se reclaman a las autoridades señaladas como responsables, por así manifestarlo expresamente al rendir su informe



justificado. - - - TERCERO.- El quejoso aduce esencialmente como conceptos de violación los siguientes: - - - a).- Que los actos que reclama son violatorios del artículo 1o. constitucional, ya que mientras no se decreta alguna medida contemplada en el artículo constitucional, como en el caso no se ha dado ningún acto de autoridad, no pueden suspenderse ni restringirse sus garantías individuales como gobernado y no obstante lo anterior, la aplicación y ejecución de los artículos que impugna, pretenden violar sus garantías individuales de libertad, fundamentación y motivación, así como de seguridad jurídica y el derecho de audiencia previa, toda vez que el aquí quejoso solo era chofer asalariado en el momento del accidente, esto es, responsable penalmente pero no civilmente coartándole mediante esos dos artículos su derecho a defenderse en el juicio civil correspondiente, o sea en el incidente de responsabilidad civil proveniente del delito, en donde podría oponer defensas y excepciones correspondientes, y solo así podría ser vencido en el juicio, y que todo esto tiene su causa en la discusión, aprobación, autorización, promulgación, refrendo, publicación de los artículos 5o. bis y 103 del Código de Defensa Social del Estado. - - - b).- Que los actos que impugna son violatorios del artículo 14 constitucional, ya que en el presente sin



CORTE DE
LA NACION
EL DE AGUAYTIN

haber sido condenado a pagar la reparación del daño, en las sentencias de primera y de segunda instancia, ahora para gozar del beneficio conmutación de la pena, la Juez natural en forma arbitraria le condiciona dicho beneficio al pago de tal reparación, aplicando el artículo 103, el cual lo obliga a responder tanto de la responsabilidad penal como de la civil, sin previo juicio en tribunales previamente establecidos, negándole así el dispositivo el derecho de contestar demanda y ofrecer pruebas entre otros. - - - c).- Que los actos que reclama son violatorios del artículo 17 constitucional, el cual determina que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, y no obstante esto, el artículo 50 bis establece que la reparación del daño por el delincuente, tiene el carácter de pena pública, independiente de la acción civil, y que ésta se ejercitará por el Ministerio Público determinando su cuantía con base en las pruebas obtenidas en el proceso, y el artículo 103 señala que una vez pagada la multa que substituya la prisión así como la sanción pecuniaria incluida la reparación del daño que se hubiere impuesto, la autoridad que conmutó la sanción ordenará la libertad del sentenciado señalando que las autoridades ordenadoras se olvidaron de regular con toda claridad que como aquéllas personas que en ejercicio de su trabajo



SUPREMA C
JUSTICIA DE L
SECRETARIA GENERAL



SECRETARÍA DE
JUSTICIA
FEDERATIVA DE
ACUERDOS

tuvieran un accidente de tránsito, es decir, estando sujetos a un patrón, cómo quedaría la responsabilidad penal deslindada de la civil; pues en términos del artículo 50 bis, para disfrutar de su libertad, primeramente tiene que pagar la reparación del daño, siendo esto independiente del hecho de que la agraviada lo quisiera demandar por la vía civil, lo que puede hacer, con lo que se le causaría un doble perjuicio, ya que tendría que efectuar un doble pago, olvidándose las autoridades responsables que el artículo 51 bis, en su fracción IV, del Código de Defensa Social del Estado, establece que están obligados a reparar los daños en los términos del artículo anterior, los dueños, empresarios, o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, con motivo y en el desempeño de su servicio; estando probado en la causa número 133/995, que el día de los hechos el aquí quejoso era un simple operario asalariado, por lo que se encuentra dentro de la hipótesis de la fracción IV del artículo 51 bis, por lo que las responsables violan el principio constitucional de unidad y congruencia en el orden jurídico, pues el artículo 83 del Código Sustantivo de Defensa Social del Estado, señala que los delitos culposos se

sancionarán con prisión de tres días a cinco años y suspensión hasta de dos años del derecho de ejercer la profesión o el oficio en cuyo ejercicio se hubiera cometido el delito, por lo que es claro que aparte de dichas sanciones no puede incluirse el pago de la reparación del daño. - - - d).- Que las disposiciones impugnadas hacen nugatorio el beneficio que se le concedió de la conmutación de la pena por multa, así como la función del fondo para la reparación del daño a las víctimas de los delitos, pues por un lado se le prohíbe seguir ejerciendo el oficio de chofer, conforme a la sentencia dictada en la causa 133/95, y por otro lado como no ha encontrado trabajo solicitó el pago de la multa por medio de dicho fondo, sin embargo tiene que pagar una suma que no le corresponde, de conformidad con el artículo 51 bis del Código de Defensa Social del Estado, por lo que al no tener dinero permanecerá en la cárcel, y no obstante esto, la agraviada en vía civil lo demandará. - - - e).- Que las autoridades responsables violan en su perjuicio el principio de supremacía de la Constitución General de la República, que se encuentra contemplado en su artículo 133, por lo que los preceptos que impugna se encuentran en contraposición con dicho dispositivo, y en contra de los artículos 48, 72, 51 bis, 83 y 100 del Código de Defensa Social del



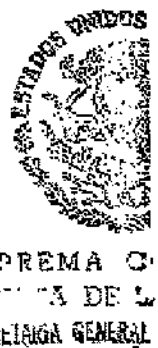
SUPLENTE
JUSTICIA DE
SECRETARIA GUN

57
62CORTE DE
LA NACION
DEL DE AGUASCALIENTES

Estado. - - - CUARTO.- son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso en su demanda de garantías. - - - En efecto el quejoso primeramente reclama de la Juez responsable el auto de fecha veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y seis, dictado dentro del proceso número 133/95, en el cual se le requiere que para gozar del beneficio de la conmutación de la pena, deberá efectuar el pago de la reparación del daño. - - - Del duplicado del proceso número 133/95, remitido por la Juez Cuarto de Defensa Social de esta ciudad, al rendir su informe justificado, mismo que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparecen entre otras constancias, las siguientes: - -

- 1.- Sentencia de primera instancia de fecha de octubre de mil novecientos noventa y seis, mediante la cual se consideró al hoy quejoso como penalmente responsable del delito de daño en propiedad ajena a título imprudencial, cometido en agravio de [REDACTED] ilícito previsto y sancionado por los artículos 414 en relación con el 83 del Código de Defensa Social del Estado, imponiéndole una pena privativa de libertad de once meses de prisión y suspensión de tres meses del derecho de ejercer su oficio de chofer,

concediéndole el beneficio de la conmutación de la sanción corporal, y en el cuarto punto resolutivo se dejan a salvo los derechos de la parte agraviada para que los ejercite por la vía legal correspondiente. - - - 2.- Auto de fecha diez de abril de mil novecientos noventa y seis, en donde se tiene al Representante Social, al sentenciado y a la agraviada, interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia anteriormente señalada. - - - 3.- Auto del nueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, en el cual se tiene a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informando que dentro del toca número 824/996, se confirmó la sentencia de primera instancia, modificando únicamente el cuarto punto resolutivo de la misma, para condenar al aquí quejoso al pago de la reparación del daño en los términos precisados en el tercer considerando de esa ejecutoria. - - - 4.- Auto de fecha veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y seis, en el cual al acordar un escrito de la parte agraviada [REDACTED] se determina con fundamento en lo dispuesto por el artículo 103 del Código de Defensa Social del Estado, que se le diga al sentenciado "que para que se tenga por otorgado el beneficio de la conmutación de la pena, deberá pagar la reparación del daño ante esta autoridad a la agraviada [REDACTED] lo anterior a fin de





SECRETARÍA DE
JUSTICIA
FEDERATIVA

dar cumplimiento a la ejecutoria de fecha 2 dos de julio del año en curso." Siendo este auto el que constituye el acto reclamado. - - - Ahora bien, el artículo 50 bis del Código de Defensa Social del Estado, establece que: "La reparación del daño por el delincuente, tiene el carácter de pena pública independientemente de la acción civil y se exigirá de oficio por el Ministerio Público, determinando su cuantía con base en las pruebas obtenidas en el proceso", y el artículo 103 de dicho ordenamiento legal, determina que: "Una vez pagada la multa que sustituya la prisión, así como la sanción pecuniaria incluida la reparación del daño, que se le hubiere impuesto, la autoridad que conmutó la sanción ordenará la libertad del sentenciado." - - - Del análisis tanto de los conceptos de violación formulados por el quejoso, como del contenido de las constancias que obran en autos, se advierte que dichos conceptos son infundados por cuanto hace a los actos de aplicación de los referidos preceptos legales, por las siguientes razones: - - - a).- En el caso, en ningún momento se violan los artículos 1o. y 14 de la Constitución General de la República, puesto que si al quejoso se le restringe alguna de las garantías consagradas en nuestra Carta Magna, se debe a que previamente se siguió en su contra un proceso, en el cual se le consideró penalmente responsable del delito de daño en

propiedad ajena a título culposo, y en donde se le impusieron diversas sanciones, por lo cual, contrariamente a lo que afirma en contra del hoy quejoso, existió un juicio ante un Tribunal previamente establecido, en donde tuvo la oportunidad de defenderse mediante las pruebas que en su caso aportara. - - - b).- Los actos reclamados por el quejoso, en ningún momento contravienen lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, puesto que no va a ser aprisionado por ninguna deuda de carácter puramente civil, sino en cumplimiento a una sentencia que se le dictó dentro de un proceso que se instruyó en su contra, en donde se le consideró penalmente responsable en la comisión de un delito de daño en propiedad ajena a título culposo, imponiéndole una pena privativa de libertad de once meses, y si bien se le concede el beneficio de la conmutación de dicha pena por la de multa, este beneficio está sujeto a los requisitos establecidos en los artículos 100, 101, 102 y 130 del Código de Defensa Social del Estado, esto es, que la sanción impuesta no exceda de cinco años, que se pague la multa que se está conmutando, así como la sanción pecuniaria, incluyendo a la reparación del daño, por lo que en caso de no cumplir con tales requisitos la privación de su libertad no va a obedecer a una deuda de carácter civil, sino a una



SUPLENTE
JUEFE DE
SECRETARIA G. J.



pena de prisión impuesta dentro de un proceso. - - - Asimismo la circunstancia de que la agraviada lo pueda demandar en lo futuro en la vía civil, es de señalarse que al efectuarse el pago de la reparación de daño dentro de la causa en que fue condenado para ello, le da la oportunidad de poder oponer dentro del juicio civil correspondiente, la excepción de pago, misma que constaría dentro de un documento público como lo es el proceso generador de los actos reclamados. - - En cuanto a lo manifestado por el quejoso de que en términos del artículo 51 bis, fracción IV del Código de Defensa Social del Estado, está obligado su patrón al pago de la reparación del daño, es de señalarse que esto únicamente procedería si la parte agraviada promueve en contra de su patrón un juicio de responsabilidad civil proveniente de delito, pero dentro de la causa que se instruyó en su contra, no puede exigírsele el pago de la reparación del daño, puesto que a éste en ningún momento se le instruyó proceso alguno, en donde se le condenara al pago de dicha reparación del daño. - - - Igualmente, la circunstancia de que en el artículo 83 del Código de Defensa Social del Estado, únicamente se establezca que los delitos culposos se sancionarán con prisión de tres días a cinco años y suspensión hasta de dos años, del derecho de ejercer la profesión o el oficio, en cuyo



CORTE
LA NACIO
DE ACUERDOS.

ejercicio se hubiera cometido el delito, no excluye al sentenciado de la responsabilidad penal en cuanto a la reparación del daño causado a la parte agraviada, pues dicha sanción en forma genérica se encuentra contemplada dentro del artículo 37, fracción III del Código de Defensa Social del Estado, y en forma específica dentro del artículo 50 bis de dicho ordenamiento legal, en donde se le señala al Ministerio Público la obligación de exigir dicha reparación en forma oficiosa. - - - c).- De igual manera los actos que se reclaman dentro del presente juicio de garantías, en ningún momento han violado el principio de supremacía de la Constitución General de la República, contemplado en su artículo 133, puesto que la Juez responsable, para la emisión de sus actos estrictamente se basó en los preceptos legales en los cuales funda su resolución, motivando la misma en la ejecutoria dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la cual no impugnó el quejoso mediante el juicio de amparo directo. - - - Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso en contra de la Juez Cuarto de Defensa Social de esta Ciudad, y Diligenciarío impar adscrito a la misma lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal. - - - QUINTO.- Conforme a lo anterior, al negarse el amparo en





este juicio en relación al acto de aplicación de los artículos 50 bis, y 103 del Código de Defensa Social del Estado, es evidente que ello origina también la negativa respecto de la constitucionalidad que se alega en contra de dichos preceptos legales, habida cuenta de la estrecha vinculación que existe entre el ordenamiento legal y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno, prescindiendo del otro, de tal suerte que la negativa del juicio de garantías en cuanto al acto de aplicación, necesariamente comprende a la ley o reglamento impugnados mediante el juicio constitucional, imponiéndose negar en su totalidad en este juicio. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 1099, visible a fojas 1757 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Salas y Tesis Comunes, bajo el rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN."



CUARTO.- Inconforme con la sentencia mencionada la parte quejosa interpuso recurso de revisión, por lo que mediante acuerdo de veinte de enero de mil novecientos noventa y siete el Juez de Distrito ordenó se remitieran los autos a este Alto Tribunal.

Por auto de trece de febrero de mil novecientos noventa y siete el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de referencia.

El Agente del Ministerio Público Federal designado formuló pedimento solicitando se confirme la sentencia recurrida en la que se niega la protección constitucional solicitada.

Por acuerdo de diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y siete se turnaron los autos al Ministro relator para la formulación del proyecto correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 10, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que se interpone contra una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un Juez de Distrito, en un juicio donde se impugnaron los artículos 50 bis y 103 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla y subsiste en el recurso el problema de inconstitucionalidad.

SEGUNDO.- La parte recurrente expresó los siguientes agravios:



SUPREMA
CORTA DE
JUSTICIA DE LA
NACION
SECRETARIA GENERAL



"1.- En primer lugar me causa agravio la sentencia impugnada toda vez que este Honorable Juzgado de Distrito declara infundados todos mis conceptos de violación expuestos en mi demanda de amparo indirecto que hice valer contra actos del Congreso del Estado y otras autoridades, tanto por la expedición y aprobación de los artículos 50 bis y 103 del Código de Defensa Social en el Estado, pero asimismo contra los actos de aplicación de la ciudadana Juez Cuarto de Defensa Social de dichos artículos. - - - Manifesté en mi demanda de amparo que en términos del artículo 51 bis del Código de Defensa Social en el Estado de Puebla, mi patrón es el responsable de pagar la reparación del daño, y no el de la voz quien solamente era operador de una unidad de transporte colectivo. Dicho artículo establece: Artículo 51 bis.- "Están obligados a reparar los daños en los términos del artículo anterior (se refiere al 50 bis) fracción IV.- Los dueños, empresarios, o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, con motivo y en el desempeño de su servicio". - - - Si bien es cierto que el artículo 50 bis cuya constitucionalidad propuse en cuestión dice: "La reparación del daño por el delincuente tiene el carácter de pena pública independientemente de la



FORTE I
LA NACI
16 DE AGUERU.

acción civil". - - - El razonamiento dentro de la sentencia dictada al respecto es el siguiente: (sic) "que hubo un juicio previo en el que tuvo oportunidad de defenderse. Que en relación al artículo 17 constitucional no se aprisionará por deuda de carácter civil sino por el proceso que se le instruyó en donde se le condenó y que la conmutación está condicionada por los artículos 100, 101, 102 y 103 del Código de Defensa Social en el Estado, que no exceda la sanción de cinco años, que se pague la multa que se está conmutando así como la pecuniaria, incluyendo la reparación del daño, por lo que en caso de no cumplir con tales requisitos la privación no va a ser por deuda de carácter civil sino a una pena de prisión impuesta de un proceso y que si la agraviada lo demanda en la vía civil al efectuarse el pago de la reparación del daño dentro de la causa en el que fue condenado se le da la oportunidad de poder oponer dentro de un juicio civil la excepción de pago. Respecto a que en los términos del artículo 51 bis-IV está obligado su patrón al pago de la reparación del daño ésta sólo procedería si la parte agraviada promueve en contra de su patrón un juicio de responsabilidad proveniente de delito, pero dentro de la causa que se instruyó en su contra no puede exigírsele el pago de la reparación del daño, puesto que a éste en ningún momento se le instruyó proceso alguno



SUPLENTE
FOLIO 1
SECRETARÍA G



CORTE
DE LA NAC
FEDERAL DE ACULCAN

en donde se le condenara al pago de dicha reparación". - - - Es muy respetable el anterior punto de vista; pero yo insisto en que ese razonamiento es totalmente correcto si el de la voz fuera el dueño o propietario de la unidad colectiva de transporte de personas. En autos está plenamente probado que el de la voz sólo era chofer, por lo tanto no entró en la hipótesis del artículo combatido 50 bis, el cual claramente establece que "la acción civil es independiente" y que además "se exigirá de oficio por el Ministerio Público determinando su cuantía con base en las pruebas obtenidas en el proceso". Además dicho dispositivo está íntimamente relacionado con el artículo 51 bis, fracción IV del mismo ordenamiento, esto es que no es correcto interpretar cada artículo independientemente entre sí, como si nada tuvieran que ver el uno con el otro, máxime que no nos encontramos en un régimen de Derecho unido, es decir el principio de unidad en el Derecho. Así el Juez de Distrito me aplica la fracción tercera del artículo 37 del orden jurídico en cuestión (que también fue introducida por decreto del 23 de junio de mil novecientos noventa y cuatro, es decir forma parte de las reformas que he impugnado su constitucionalidad) artículo que establece "Las sanciones y medidas de seguridad son: fracción tercera.- Sanción pecuniaria, que

comprende la multa y la reparación del daño", pero no se me aplica correctamente el artículo 51 bis, fracción IV, siendo que este artículo es tan válido como los que ha hecho referencia el ciudadano Juez. - - - La aplicación de dichos preceptos han sido en forma rígida, como si éste se tratara de un amparo de estricto derecho, sin tomar en cuenta que me acogí al beneficio de la suplencia de la queja que consagra el artículo 76 bis, fracción I y II de la Ley de Amparo. Además de que tampoco considero que esté suficientemente motivada y fundamentada la sentencia recurrida, específicamente la transcripción que hice de una parte de la misma y que me parece que ahí se encuentra el fondo del problema, puesto que dicho razonamiento se acompaña de las mismas disposiciones que estoy atacando de inconstitucionales, esto es el ciudadano Juez de Distrito "fundamenta" su razonamiento en las mismas disposiciones que estoy combatiendo, siendo que de por sí no estaba de acuerdo con su constitucionalidad y como ciudadano de clase baja que soy solamente he querido obtener se me concedan garantías constitucionales fundamentales que he invocado, como son las de respeto a la constitucionalidad 133 constitucional, debido proceso legal en base a mis derechos fundamentales artículos 1o. y 14 constitucionales,



SUPLENTE
JUEZ DE
SECRETARÍA GENE



etc. - - - Según su señoría si el de la voz paga dentro de esta causa, puedo oponer excepción de pago en otro juicio que la agraviada pueda promover, con esto se hace a un lado el artículo 51 bis, fracción IV, del multicitado Código Penal, esto es como si no tuviera ninguna relación con el meollo jurídico planteado y además me condena a pagar varias prestaciones o cargas que en mi carácter de trabajador asalariado no puedo pagar. Y además todavía tengo que pagar a otro abogado que me defienda en otro juicio civil si lo desea la "agraviada", lo cual es contrario a la justicia, máxime que si demandan al patrón solamente yo no tendría personalidad para comparecer a dicho juicio, esto es generándose otras situaciones jurídicas o mejor dicho, antijurídicas que están de sobra y de por sí no debieran darse. - - - 2.- En el mismo sentido no hay ninguna disposición expresa (nos encontramos en un régimen de derecho positivo escrito) que diga mucho menos en el artículo 51 bis, fracción IV del Código de Defensa Social local que al patrón sólo puede ser demandado en la vía civil, ya que este artículo como he señalado hace referencia directa al anterior o sea al 50 bis y al 51 de dicho ordenamiento, ya que ambos se refieren a las reglas de la reparación del daño. Insisto los razonamientos de su señoría son muy correctos

para el caso de que el de la voz hubiese sido el propietario del vehículo accidentado, y vertidos a mi caso los considero subjetivos y respaldados con las mismas disposiciones que impugna como inconstitucionales. - - - 3.- Otro agravio, es el hecho de que en la sentencia de primera instancia no se hizo una cuantificación de la reparación del daño como lo marca el artículo 50 bis "y se exigirá de oficio por el Ministerio Público determinando su cuantía, con base en las pruebas en el proceso" y que además en el proceso no había aportado prueba alguna la agraviada manifestando esto en mis conceptos de violación. Hubo un total silencio al respecto por parte de quien resolvió la ejecutoria que en este acto recurro. Esto es no se entró al estudio, no se especificó porqué no se entraba al estudio de dicha cuestión la que también me parece muy importante, puesto que no nos encontramos ante una sentencia líquida, en la que conste cantidad alguna a la que me tenga que sujetar para pagar la reparación del daño, por lo que dicha sentencia no está fundamentada en términos aritméticos, y dicho artículo 50 bis es muy claro al señalar "determinando su cuantía" entendiendo ésta como la cantidad o medida en números, lo cual no ocurrió. Esto es suponiendo sin conceder que yo tenga dicha obligación. Así que es en dicha sentencia en donde sí le faltan



SUPREMA
CORTA DE
SECRETARIA GILB



requisitos de fondo para que se me pueda obligar a pagar esa prestación, pero sólo se ha hablado de los requisitos que el de la voz tiene que cubrir para gozar de la conmutación de la pena, lo que no considero un debido Proceso Legal. - - - 4.- Como cuarto y último agravio: manifesté en mi demanda de garantías que primero la Juez de Primera Instancia me otorgó el beneficio de la conmutación de la pena por acuerdo de fecha dieciocho de septiembre año próximo pasado, esto es después de dictada la sentencia, y eso sin condicionamiento alguno, incluso girando oficio al fondo para la reparación del daño a las víctimas de los delitos. Por auto de fecha veintinueve de octubre del mismo año sorpresivamente modifica su acuerdo inmediato anterior, sin haber fundamentado ni motivado la razón de porqué cambió el sentido del acuerdo, siendo que es por elemental principio procesal que los autos o acuerdos solamente pueden ser modificados mediante el recurso idóneo. Por lo que al respecto si la agraviada no estaba de cuerdo con el auto del dieciocho de septiembre tenía que haber impugnado dicho acuerdo conforme lo marca la ley lo cual, sin más, con un simple escrito que en ningún momento menciona que es un amparo ni recurso, el Juez lo acuerda favorable y cambia el sentido del auto en que ya se me había otorgado la conmutación sin



CORTE
LA NACI
DE AGUER...

otro requisito. - - - Respecto a esto tampoco se entró al estudio ni se manifestó razón alguna del porqué de ello, dejando infundadamente en silencio esta cuestión que también tiene relación con mi situación jurídica.

TERCERO.- En términos de lo imperativamente dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, en suplencia de los agravios, este Alto Tribunal advierte que el Juez de Distrito actuó en forma ilegal, atento a las siguientes consideraciones.

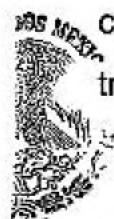
Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que cuando se reclaman en amparo indirecto leyes o reglamentos con motivo de su acto de aplicación, en primer lugar debe estudiarse la norma legal impugnada y si se declara inconstitucional será innecesario abordar el acto de aplicación, ya que tal declaración también comprende a éste; en caso contrario, es decir, si se estima que la norma reclamada no es contraria a la Constitución Federal, entonces deberá estudiarse la legalidad del acto concreto de aplicación, cuando se combata por vicios propios. Por tanto, la inconstitucionalidad de la ley o reglamento impiden examinar el acto de aplicación, pero la inconstitucionalidad de tal acto no constituye impedimento alguno para que se entre al estudio de la constitucionalidad de las normas legales reclamadas.





Esto implica que, por razón de método, primero debe estudiarse la constitucionalidad de la ley o reglamento reclamado y, solamente en los casos en que se determine negar el amparo en su contra, se entrará al estudio de los conceptos de violación enderezados en contra del acto de aplicación, por vicios propios.

Sólo existe como excepción la siguiente: cuando el amparo sea improcedente contra el acto de aplicación también lo será contra la norma combatida, porque su estudio no puede desvincularse ya que la ley (cuando sea heteroaplicativa), considerada en abstracto, no causa perjuicio, sino que lo causa a través del acto en que se aplicó.



CORTE
LA NA
RA DE A...

En apoyo a lo anterior se puede citar a guisa de ejemplo la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, Tomo I Materia Constitucional, que a la letra dice:

“LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.-

Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento.

La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación."



SUPREMA C
JUSTICIA DE L
SECRETARÍA G

Ahora bien, el Juez Federal no actuó en forma legal al aplicar la jurisprudencia transcrita, porque le dio una interpretación contraria a lo que establece, ya que primero analizó el acto de aplicación y al negar el amparo respecto a éste, tal negativa, la hizo extensiva a los preceptos legales reclamados, siendo que debió analizar en primer lugar dichos preceptos y si estimara improcedente el amparo en su contra o si resolviera negar la protección constitucional solicitada, solamente en esas hipótesis le correspondía resolver la impugnación del acto de aplicación por vicios de legalidad.

La forma en que resolvió el Juez de Distrito lógicamente trajo como consecuencia la falta de examen de los preceptos



reclamados, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Amparo, este Alto Tribunal revisor procede a subsanar esa omisión.

CUARTO.- Es improcedente el amparo y, por ello, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio respecto del artículo 50 bis del Código de Defensa Social del Estado de Puebla cuyo texto, no obstante que se transcribió tanto en los conceptos de violación como en el fallo que se revisa, para efectos de este estudio se estima pertinente volverlo a insertar.



CORTE
A NACI
DE AGUERO

Dicho dispositivo legal a la letra dice: "La reparación del daño por el delincuente, tiene el carácter de pena pública, independientemente de la acción civil, y se exigirá de oficio por el Ministerio Público determinando su cuantía con base en las pruebas obtenidas en el proceso."

Es de suma importancia destacar las circunstancias que se desprenden de las constancias remitidas por el Juez responsable:

1.- En la sentencia de primera instancia la Juez natural, en cuanto a la reparación del daño determinó "CUARTO.- Se dejan a salvo los derechos de la parte agraviada para que los ejercite por la vía legal correspondiente"; y respecto a la pena impuesta concedió el beneficio de la conmutación de la sanción.

2.- Contra dicha sentencia interpusieron recurso de apelación el Ministerio Público, el sentenciado, ahora quejoso, y la parte agraviada.

3.- Con posterioridad en el juzgado de origen se dictó el acuerdo de nueve de agosto de mil novecientos noventa y seis en el que tuvo por recibido el testimonio de la resolución de apelación, transcribiéndose sus puntos resolutivos que a la letra dicen: "PRIMERO.- Se modifica el punto resolutivo cuarto de la sentencia de primera instancia para quedar en los siguientes términos: CUARTO.- Se condena a [REDACTED]

[REDACTED] al pago de la reparación del daño, en los términos precisados en el último párrafo del punto tercero considerando de esta ejecutoria. SEGUNDO.- Se confirma en sus términos los demás puntos resolutivos de la sentencia de primer grado que dio origen a esta alzada."

SUPLENTE
JUS
SECRETARIA G. N. L. R.

4.- Por ocuso el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis el peticionario de amparo se acogió al beneficio de la condena condicional.

5.- A instancia de la parte agraviada se dictó el acuerdo de veintinueve de octubre del año indicado, en el que se indicó que para que se tenga por otorgado el beneficio de la conmutación de la pena deberá pagarse la reparación del daño. Este es el acto reclamado que dio origen al amparo.



De lo anterior se desprende si bien es cierto que en el auto combatido se hace referencia a la reparación del daño, no menos cierto es que tal auto no constituye el primer acto de aplicación del artículo 50 bis reclamado que evidentemente es heteroaplicativo.

En efecto, en la sentencia de apelación fue donde se impuso como pena el pago de la reparación del daño, por lo que es incuestionable que esa sentencia constituye el primer acto de aplicación del citado artículo 50 bis, esto implica que la obligación de pagar dicha reparación no deriva del acuerdo reclamado, sino de la sentencia condenatoria que al no ser combatida en amparo, hasta el momento, se entiende consentida.



CORTE
LA NAC
DE ACUER

En consecuencia, como en la especie no se reclama la sentencia de segunda instancia que es en la que se aplicó por primera ocasión el artículo 50 bis, es de concluirse que el juicio de amparo, respecto de este precepto, debe sobreseerse, pues no es factible analizar tal precepto a la luz de su segundo o ulterior acto de aplicación, si no hubo inconformidad respecto del primero.

A lo anterior es aplicable por similitud jurídica, la jurisprudencia número 200, visible en las páginas 194 y 195 del referido tomo del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

"LEYES, AMPARO CONTRA, DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACIÓN.- Este alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial No. 273 de la Octava Parte, Compilación de 1985, intitulada **"SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO"**, donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos





de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria."



CORTE DE
LA NACION
DE JUICIOS

Así las cosas, procede modificar la sentencia que se revisa y con apoyo en los artículos 73, fracción XII, párrafo segundo en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de garantías por cuanto hace al artículo 50 bis reclamado.


QUINTO.- Respecto del artículo 103 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, en esencia, el quejoso aduce como conceptos de violación lo siguiente:

* Que se viola el artículo 1º constitucional porque las garantías individuales sólo se pueden suspender o restringir en los supuestos previstos en el artículo 29 de la propia Ley Fundamental, mas no con el precepto legal reclamado, con el que se violan las garantías de libertad, fundamentación y motivación, seguridad jurídica y previa audiencia.

* Que el artículo reclamado obliga al quejoso a responder civil y penalmente siendo que sólo debe responder por esto último, coartándole además el derecho a defenderse en el juicio civil que se llegase a promover en su contra.

* Que con el citado precepto se le aplica una pena por analogía y se hace nugatorio el beneficio de la conmutación de la pena.

* Que el artículo 17 constitucional establece, entre otras cuestiones, que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil y no obstante ello, el numeral impugnado dispone que hasta que se pague la reparación del daño se ordenará la libertad del sentenciado.


SUPREMA C
JUSTICIA DE L
SECRETARÍA GENERAL

* Que existe contradicción entre los artículos combatidos con otros del mismo ordenamiento legal al que pertenecen.

* Que se viola el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la máxima ley del país.

Tales motivos de inconformidad son infundados.

El artículo 103 mencionado a la letra dice: "Una vez pagada la multa que substituya la prisión así como la sanción pecuniaria incluida la reparación del daño que se hubiere impuesto, la autoridad que conmutó la sanción ordenará la libertad del sentenciado."

A pesar de que se sobreseyó en el juicio respecto del artículo 50 bis del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, que establece que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública, a fin de dar contestación a los



conceptos de violación se estima necesario precisar que tal reparación, efectivamente constituye una pena, no sólo porque así lo establece una ley de naturaleza penal, sino además, porque se impuso por una autoridad judicial como consecuencia de un proceso en el que se determinó, con certidumbre jurídica, la responsabilidad del peticionario de garantías en la comisión de una conducta catalogada como delito.



ORTE DE
A NACI
DE A...

A lo anterior es aplicable por igualdad de razón, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, visible en las páginas 178 y 179, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, que a la letra dice:

"Multa como pena sustitutiva. Si no se paga no se tiene derecho a recuperar la libertad por no encuadrar aquélla en las causas contempladas en la fracción X del artículo 20 constitucional.- El artículo 70, fracción III, del Código Penal Federal establece como beneficio para el sentenciado el que, a juicio del juzgador le sea sustituida la pena privativa de libertad por una multa. Dicha multa como substitutivo penal, lógicamente, tiene un contenido económico que se puede traducir en una prestación en dinero, pero su naturaleza es de carácter penal, no sólo porque como tal está prevista en un ordenamiento de ese tipo (artículo

24, inciso 6 del Código Penal Federal), sino también porque es impuesta por la autoridad judicial como consecuencia de un proceso penal en el cual se determinó, con certidumbre jurídica, la responsabilidad de una persona en la omisión o comisión de un hecho que por ley es declarado, calificado y castigado como delito. Así, la existencia de la multa se deriva de la imposición de una pena privativa de libertad a la cual sustituye, como resultado directo de un delito y, por lo tanto, su origen es la transgresión de la ley penal, siendo su propia naturaleza, el de una pena, aunque de carácter pecuniario o patrimonial. Por lo tanto, la multa impuesta por el juzgador como pena substitutiva de prisión, no encuadra en las causas contempladas en la fracción X del artículo 20 constitucional en virtud de que, aun cuando se puede traducir en una prestación en dinero, dicha multa es una pena cuyo pago constituye una condición de efectividad para que el sentenciado tenga el derecho de recuperar su libertad, y por lo tanto, mientras esté en suspenso tal derecho, esto es, mientras no se cubra la sanción pecuniaria, no se actualiza el supuesto previsto por el artículo constitucional citado, ya que el sentenciado no tiene todavía, dentro de su haber jurídico, el derecho de recuperar su libertad."



SUPLENTE
JUST.
SECRETARÍA DE JUSTICIA



Ahora bien, el artículo 103 reclamado sólo prevé que para el caso de que se haya conmutado la pena, la libertad se decretará hasta que se pague, además de la sanción pecuniaria y la multa que sustituya la prisión, la reparación del daño, esto es, tal dispositivo condiciona el otorgamiento de la libertad, lo que implica que no se tiene derecho a ella hasta que se cumpla con lo exigido por la ley.



ORTE DE
A NACIÓN
DE ASALADOS.

Por tanto, el sentenciado aún no tiene dentro de su haber jurídico el derecho a la libertad, puesto que está sujeta a la condición suspensiva de que pague la reparación del daño que con el carácter de pena pública se le impuso, pero esto no implica que el beneficio concedido haya desaparecido, sino sólo que está suspendida su efectividad.

Por similitud jurídica es aplicable a lo anterior la última jurisprudencia transcrita, la que se da aquí por íntegramente reproducida.

Así, el artículo 103 de mérito no restringe ni suspende garantías individuales del quejoso, ya que si bien es cierto que conforme al artículo 14 constitucional nadie puede ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, la libertad del quejoso no está restringida por el precepto reclamado, sino por la sentencia dictada en su contra en un proceso penal instaurado ante tribunales ya establecidos en el que estuvo en aptitud de

defenderse; siendo evidente así que no se viola la garantía de audiencia ni de seguridad jurídica.

El artículo 103, como ya se dijo, sólo contempla una condición para que el sentenciado alcance nuevamente su libertad, pero no es en sí mismo el que la restringe ya que su aplicación no es autónoma o aislada, sino como consecuencia de todo un proceso penal que culminó con sentencia condenatoria.

El artículo reclamado tampoco viola la garantía de fundamentación y motivación contenidas en el artículo 16 constitucional, ya que no autoriza a las autoridades aplicadoras a prescindir de tales requisitos al momento en que actúen, sin que pueda estimarse que existe obligación por parte del legislador de plasmar en cada precepto legal el irrestricto respeto a tal garantía, ya que basta que los citados requisitos estén contenidos en el mencionado artículo 16 para que la autoridad correspondiente se encuentre constreñida a su observancia.

Por tanto, no se viola el artículo 16 de la Constitución Federal por el hecho de que el artículo 103 reclamado no establezca que las resoluciones que concedan o no la libertad para el caso de que se pague o cumpla con la pena impuesta deben estar fundadas y motivadas, ya que el cumplimiento de estos requisitos no deriva de la ley secundaria sino de la ley fundamental, por lo que es innecesario que en aquélla se repitan los requisitos que prevé esta última.



Por las anteriores consideraciones resulta evidente que el artículo 103 impugnado no establece la posibilidad de emitir las resoluciones en forma arbitraria o caprichosa, ya que como cualquier acto de molestia, por mandato constitucional, debe estar fundado y motivado, sin que se requiera que estos requisitos se reproduzcan en dicho artículo.



CORTES
JUDICIAL
FEDERAL

Sobre este particular es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia número 145, visible en las páginas 148 y 149, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo I, materia constitucional, que a la letra dice:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, NO NECESITAN REPETIRSE EN LA LEY SECUNDARIA (ARTÍCULO 151 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).- Un precepto no viola el artículo 16 constitucional por el hecho de no establecer que los actos de molestia deben constar en mandamiento escrito de autoridad competente y que deben estar fundados y motivados. Estos requisitos están contenidos en el artículo 16 constitucional y no necesitan repetirse en la Ley secundaria para que ésta sea constitucional. La conclusión anterior es lógica puesto que la circunstancia de que no exista en la Ley aplicable precepto alguno que imponga la autoridad responsable la obligación de fundar y

motivar su mandamiento de que éste debe ser escrito, no exime a la autoridad el cumplimiento de esos requisitos, en atención a que, en ausencia de norma específica contenida en la ley del acto, se halla el mandato imperativo del artículo 16 de la Constitución Política, que protege dicha garantía, sin excepción, a favor de todos los gobernados. En estas condiciones, el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, que faculta a las autoridades hacendarias para emitir mandamientos de ejecución y requerimientos de pago en contra de los particulares, no resulta violatorio de la Constitución por el hecho de no reproducir los requisitos constitucionales de motivación y fundamentación."



SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GAB

En otro orden, no es cierto que el artículo 103 combatido obligue al quejoso a responder de los daños causados tanto en la vía civil como en la penal, ya que en todo caso esto deriva del artículo 50 bis que establece que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública independientemente de la responsabilidad civil.

Lo que el artículo 103 prevé, se insiste, es una condición para que se decrete la libertad del sentenciado, pero nada refiere a la cuestión civil, según se advierte de su lectura.



Tampoco es cierto que con el citado precepto se imponga una pena por analogía, ya que no prevé algún tipo de sanciones, además la reparación de daño como pena no está prevista por ese artículo sino por el 50 bis.

En cuanto a que con el artículo 103 se hace nugatorio el beneficio de la conmutación de la pena, debe indicarse al quejoso: primero, que tal conmutación no es una garantía individual sino, precisamente, un beneficio; y, segundo, como requisito para hacer efectiva dicha conmutación se requiere que se pague la multa que sustituya a la prisión, la sanción pecuniaria y la reparación del daño, lo cual implica que el beneficio concedido continúa vigente, pero condicionado, para su eficacia, a que se cumpla con los requisitos apuntados.

FORTE P.
LA NACIÓN
A. DE J. J. J.

En otro aspecto, el artículo 103 de mérito no viola el artículo 17 constitucional, ya que la reparación del daño a que fue condenado el peticionario de garantías tiene el carácter de pena pública, como ya se vio con antelación y sólo tiene el carácter de deuda civil cuando está a cargo de un tercero, tal y como se ha establecido en la jurisprudencia número 283, visible en la página 159. del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo II, materia penal, que reza:

"REPARACIÓN DEL DAÑO EXIGIBLE A TERCEROS.- La reparación del daño a cargo directo del delincuente constituye pena pública sobre la que el juez debe resolver precisamente en

la sentencia definitiva del proceso, pero la que es exigible a tercero tiene el carácter de responsabilidad civil y debe tramitarse en forma de incidente ante el propio juez de lo penal, o en juicio especial ante los tribunales del orden civil si se promueve después de fallado el proceso”.

Por tanto la libertad del quejoso no está afectada por una deuda de carácter civil, pues no contrajo ninguna obligación de esa naturaleza para con la ofendida; sino que tal libertad está restringida por habersele declarado culpable en la comisión de un ilícito y su recuperación está sujeta a que se compurgue pena mediante el pago de la reparación del daño, así como a pago de la multa substitutiva de la prisión y de la sanción pecuniaria.



Por otro lado, el hecho de que pueda existir contradicción entre el dispositivo legal reclamado con otros del mismo ordenamiento legal al que pertenecen, no implica que se violen garantías, puesto que para que esto suceda es menester que la contradicción se dé con la Constitución Federal.

La posible contradicción entre normas legales secundarias, puede ser motivo de interpretación por parte de las autoridades comunes y, si esa interpretación causa agravio, es una cuestión de legalidad que en todo caso corresponde conocer a los jueces de distrito o a los tribunales colegiados y no a esta Suprema Corte, que sólo se ocupa de aspectos de constitucionalidad.



Por último, el artículo 103 de referencia no es contrario al principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la Constitución Federal, ya que no prevé la posibilidad de que la autoridad común aplique normas secundarias a pesar de ser contrarias a la máxima ley del país; el citado precepto reclamado únicamente dispone, como reiteradamente se ha dicho, una condición para que el sentenciado, aquí quejoso, recupere su libertad, mas no la posibilidad de la inobservancia de la Ley Fundamental.



CORTE DE
LA NACIÓN
DE ACUERDOS.

Así las cosas, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer contra el artículo 103 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, y al no advertir diversa violación a la ley que amerite suplencia en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, procede confirmar la negativa del amparo decretada por el Juez de Distrito, aunque por motivos diversos a los expuestos en la sentencia que se revisa.

SEXTO.- Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia legal para pronunciarse sobre los agravios esgrimidos en el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a) constitucional, 84, fracción I, inciso a) y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, en atención al siguiente orden de consideraciones.

Según se puede constatar del resultando primero de esta ejecutoria, la parte quejosa reclamó del Congreso, Gobernador,

Secretario de Gobernación y Director del Periódico Oficial, todas estas autoridades del Estado de Puebla, la expedición, aprobación, promulgación y publicación de los artículos 50 bis y 103 del Código de Defensa Social para esa entidad federativa; por otra parte, del Juez Cuarto de Defensa Social de dicho Estado el acuerdo de fecha veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y seis dictado en los autos de la causa penal 133/95, reclamando finalmente del diligenciarlo de los expedientes impares adscrito al citado Juez, la notificación y ejecución material de dicho acuerdo.

En la sentencia recurrida el Juez de Distrito negó el amparo y protección de la justicia federal solicitados respecto de todos los actos y autoridades responsables.

SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARIA GENERAL

Ahora bien, los agravios hechos valer por la parte quejosa contienen, en esencia, lo siguiente:

a).- Primero se afirmó que causa agravio que el Juez de Distrito declarara infundados los conceptos de violación esgrimidos contra los preceptos reclamados y los actos de aplicación.

b).- Después se hizo referencia a que en la demanda de amparo se alegó que en términos de lo dispuesto en el artículo 51 bis del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla el obligado al pago de la reparación del daño no lo es el peticionario



se garantías, sino su patrón, pues aquél sólo era operador de una unidad de transporte colectivo.

c).- Se transcribió parte de la sentencia constitucional y se indicó que los razonamientos del Juez de Distrito serían correctos si el quejoso fuese dueño de la citada unidad de transporte, por lo que al quedar acreditado que únicamente era chofer no se encuentra dentro de los supuestos normativos del artículo 50 bis que se tilda de inconstitucional, además, este precepto debió de interpretarse en relación con el 51 bis, fracción IV, pues no es correcto interpretarlos por separado.



CORTE DE
LA NACIÓN
AL DE AGUASCALIENTES

d).- Se alegó que el Juez Federal aplicó el artículo 37, fracción III, del ordenamiento legal en cuestión, pero no aplicó correctamente el 51 bis, fracción IV, mencionado; que tales preceptos se aplicaron en forma rígida, como si se tratara de un asunto de estricto derecho, sin tomarse en cuenta que el peticionario de amparo se acogió al beneficio de la suplencia de la queja.

e).- Que la sentencia recurrida no está debidamente fundada y motivada pues los razonamiento que la sustentan se apoyan en las mismas disposiciones legales combatidas.

f).- Que según el Juez de Distrito si el quejoso paga la reparación del daño en la causa penal, puede oponer esto como excepción en el juicio civil que llegase a promover la agraviada pero, en realidad, se le está condenando a pagar varias veces

prestaciones que en su carácter de trabajador asalariado no puede pagar.

g).- Que es contrario a la justicia el que el peticionario de garantías tenga que pagar los honorarios de un abogado para el caso de que la agraviada lo demande en la vía civil; que si únicamente se demanda al patrón el quejoso no tendría intervención alguna; que "no hay disposición expresa ... que al patrón sólo puede ser demandado en la vía civil".

h).- Que en la sentencia de primera instancia no se hizo una cuantificación de la reparación del daño como lo prevé el artículo 50 bis reclamado.



SUPREMA CO
JUSTICIA DE LA
SECRETARIA GENERAL D

i).- Que el quejoso alegó en sus conceptos de violación que la agraviada no había aportado prueba alguna, sin que el Juez Federal se haya ocupado de tal cuestión, aspecto que es de suma importancia ya que la sentencia no es líquida al no constar la cantidad que se debe de pagar, por lo que dicho fallo no está fundamentado aritméticamente y carece de los requisitos de fondo para condenar.

j).- Que en la sentencia constitucional se omitió analizar lo argüido en cuanto a que en la demanda de garantías se manifestó que primero se le otorgó el beneficio de la conmutación de la pena sin condición alguna y después, sin fundamento ni motivo, se modificó el acuerdo respectivo, siendo que sólo procede tal modificación mediante recurso; por lo que si la



agraviada no estaba conforme debió interponer el medio de defensa adecuado.

Del examen de lo anterior se advierte que no se expresaron razonamientos lógicos, jurídicos y concretos encaminados a combatir la negativa del amparo decretada por el Juez de Distrito respecto de los preceptos legales reclamados y, como en los agravios sólo se arguyeron cuestiones de legalidad, es incuestionable que la competencia legal para ocuparse de ellos se surte en favor de un Tribunal Colegiado y no de este Alto Tribunal.

REFE DE
NACION.
I ACUERDOS

Por lo que lo procedente es que con fundamento en el artículo 92 de la Ley de Amparo se haga reserva de jurisdicción y se le remitan los autos al Tribunal Colegiado en turno del Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Puebla, Puebla, para efectos de su competencia.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:


PRIMERO.- En la materia de la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se modifica la sentencia que se revisa.

FEDERACION

SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo respecto del artículo 50 bis del Código de Defensa Social del Estado de Puebla.

TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a [REDACTED] en contra del acto que reclama del H. Congreso, del Gobernador Constitucional y del Director del Periódico Oficial, todos ellos del Estado de Puebla, consistente en el artículo 103 del propio Código de Defensa Social.

CUARTO.- Se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado en turno del Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Puebla, Puebla, para efectos de su competencia.

Notifíquese; cúmplase y a fin de que el citado Tribunal esté en aptitud de resolver el recurso, previo desglose y copias certificadas que obren en su lugar, envíesele el escrito de expresión de agravios; en su oportunidad archívese el tomo. 
SECRETARÍA GENERAL

Así, lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de once votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y Presidente Aguinaco Alemán.

Fue ponente el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.



Firman el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Ministro Ponente con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE:

MINISTRO JOSE VICENTE AGUINACO ALEMAN

PONENTE:

ORTE DE
NACION
DE ACUERDOS.

MINISTRO GUILLERMO L. ORTIZ MAYAGOITIA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

LIC. JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ

FEDERACION

Esta hoja corresponde al amparo en revisión 442/97.

Promovido por

Fallado el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y ocho,
en el sentido siguiente: PRIMERO.- En la materia de la competencia de esta

Suprema Corte de Justicia de la Nación, se modifica la sentencia que se revisa.
SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo respecto del artículo 50 bis del Código de Defensa Social del Estado de Puebla. **TERCERO.-** La Justicia de la Unión no ampara ni protege a [REDACTED] en contra del acto que reclama del H. Congreso, del Gobernador Constitucional y del Director del Periódico Oficial, todos ellos del Estado de Puebla, consistente en el artículo 103 del propio Código de Defensa Social. **CUARTO.-** Se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado en turno del Sexto Circuito, con residencia en la ciudad de Puebla, Puebla, para efectos de su competencia.

RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL DE AGUERRAS
 24 JUN. 1998
 PARA NOTIFICACION EL

25 JUN. 1998 por lista de la misma fecha, se
 notificó la resolución anterior a los interesados. Conste.

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA,
 Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS
 A OIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION,
 POR MEDIO DE LISTA. DOY FE